

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

RECIBIDO ABR 6 26 AM 10:41
3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 816

INFORME POSITIVO

6 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 816, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 816 tiene como propósito "...enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" (DACO), a fin de instituir los criterios bajo los cuales el DACO, fijará las cuantías de las multas que imponga por violaciones a las normas, leyes y reglamentos bajo su jurisdicción o a las órdenes que emita; establecer disposiciones relacionadas a los infractores reincidentes; proveer para que el Departamento enmiende el Reglamento Núm. 9377 de 3 de mayo de 2022, conocido como "Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas", con el propósito de atemperarlo a las disposiciones contenidas en esta Ley; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al señalarnos que

[l]a Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, creó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger los derechos del consumidor en Puerto Rico y garantizar que las relaciones de consumo se lleven a cabo dentro de parámetros de transparencia, justicia y cumplimiento con la ley. Como parte de esa misión, el DACO tiene la autoridad para imponer multas administrativas a los

negocios que violen las leyes, reglas u órdenes administradas por ese Departamento.

Pero la historia de estas últimas décadas nos muestra que no todas las infracciones administrativas son iguales, ni todas afectan en la misma medida a los derechos del consumidor. En la mayoría de los casos, las violaciones encontradas son menores, errores de cumplimiento o errores operativos que no implican intención maliciosa y no causan daño directo al consumidor. La aplicación automática de sanciones pecuniarias en estos casos puede imponer cargas desproporcionadas, en particular a pequeños y medianos comerciantes, sin avanzar el propósito de la ley, que es fomentar un mercado justo y transparente.

Por lo cual, esta Asamblea Legislativa considera que se deben instituir criterios bajo los cuales el Departamento, fije las cuantías de las multas que imponga por violaciones a las normas, leyes y reglamentos bajo su jurisdicción o a las órdenes que emita. De esta manera, balanceamos el poder sancionador del DACO con los principios de proporcionalidad y razonabilidad administrativa.

Cabe destacar que, el Reglamento Núm. 9377 de 3 de mayo de 2022, conocido como "Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas", se promulgó bajo la premisa de que el propósito medular del proceso de imposición de multas del Departamento de Asuntos del Consumidor es disuadir a los comerciantes de bienes y servicios en Puerto Rico de incurrir en aquellas prácticas prohibidas por las leyes, reglamentos y órdenes que les sean de aplicación. Así las cosas, el Reglamento establece, específicamente, en la Regla 8 los criterios para fijar la cuantía de una multa. De igual modo, las Reglas 9 y 10 del Reglamento establecen las circunstancias agravantes y atenuantes al momento de imponer una multa.

Dicho lo anterior, esta Ley uniforma los procesos de imposición de multas administrativas contenidos en la Ley Orgánica del DACO y en la normativa promulgada para instrumentar dicha Ley, reafirmando que su misión no debe ser punitiva sino restaurativa.

En suma, esta Ley promueve un mercado leal y competitivo donde los consumidores estén protegidos y los negocios tengan reglas justas, proporcionadas y previsibles. Con las enmiendas aquí propuestas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico actualiza el marco jurídico de multas e infracciones del Departamento de Asuntos del Consumidor a los principios de buen gobierno regulatorio, transparencia administrativa y justicia económica que deben regir toda gestión pública. Asimismo, se fortalece el principio de libertad económica, al reducir cargas regulatorias innecesarias y fomentar la autorregulación responsable dentro del comercio puertorriqueño. De esta manera, se promueve un entorno de libre mercado dinámico, donde la competencia justa y el cumplimiento voluntario sirvan como los pilares del desarrollo económico de la Isla.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión contó con los comentarios del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, quien se expresó a su favor.

Esbozó que

[l]a Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" establece el deber ministerial de vindicar y proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños. De ahí que, a este Departamento le parecen loables los intentos y actuaciones para fortalecer, preservar y expandir las protecciones a los consumidores y las familias puertorriqueñas. Cónsono con este propósito en ley, durante las pasadas décadas el DACO ha aprobado una serie de reglamentos, así como enmiendas a estos, con el fin de regular la inmensa mayoría de los aspectos que impactan el consumidor en Puerto Rico, incluyendo ciertas actividades comerciales, para garantizar la protección de sus derechos.

Cónsono con ello, el Reglamento 9377 conocido como Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas (en adelante, "Reglamento"), establece específicamente en la Regla 8 los criterios para fijar la cuantía de una multa. De igual modo, las Reglas 9 y 10 del Reglamento establecen las circunstancias agravantes y atenuantes al momento de imponer una multa. (...).

HP
Añadió que "...en el ordenamiento jurídico puertorriqueño, la jerarquía normativa constituye un principio estructural esencial para garantizar la coherencia del sistema legal y la vigencia del Estado de Derecho. Dentro de dicha jerarquía, la ley ocupa un rango superior al reglamento administrativo. Esta primacía no es meramente formal, sino que responde a fundamentos constitucionales, democráticos y jurisprudenciales que delimitan claramente el alcance del poder reglamentario de las agencias administrativas. Así, concluimos que las agencias son "criaturas de ley" y solo pueden ejercer aquellas facultades que el estatuto creador les confiere expresa o implícitamente. O sea, el reglamento constituye un instrumento para implementar y ejecutar la ley, pero no fue diseñado para alterarla, ampliarla o restringirla".

Dicho lo anterior, sostuvo que una agencia administrativa no puede restringir las prerrogativas legislativas "...aduciendo que existen leyes especiales o reglamentación que ya atiende el asunto". Por el contrario, es del "...criterio que mientras más robusta y específica sea nuestra Ley Orgánica, mayores garras tendremos para ir tras aquellos que constantemente violan los preceptos de las buenas prácticas comerciales. Del mismo modo, coincidimos en que la misión de nuestra agencia no debe ser punitiva sino restaurativa para aquellos infractores que por descuido o negligencia común se les escapó un detalle que no implica un daño directo al consumidor". (Énfasis nuestro)

Por lo expuesto, y "...luego de analizar la pieza legislativa, avalamos la misma". (Énfasis nuestro). Ahora bien, si solicitaron del Departamento que consultáramos el

Reglamento 9377, conocido como "Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas" "...en aras de integrar en el cuerpo decretativo, lenguaje cónsono con lo allí dispuesto para que forme parte del estatuto que en su día se apruebe". (Énfasis nuestro). Cónsono con esto, optamos por enmendar el P. del S. 816, a fin de integrarle el texto contenido en las reglas 4, 8, 9, 10, 11 y 13 del mencionado Reglamento 9377. Entendemos que lo propuesto en el proyecto queda mejor servido con el lenguaje ya contenido en el aludido Reglamento, el cual, a grandes rasgos, resulta más abarcador y de más fácil implantación, toda vez que el DACO ya lo viene haciendo desde el año 2022.

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, este proyecto busca enmendar la Ley Orgánica del DACO, a fin de instituir los criterios bajo los cuales podrán fijar las cuantías de las multas que se impongan por violaciones a las normas, leyes y reglamentos bajo su jurisdicción o a las órdenes que este emita.

Según la Agencia, el precitado Reglamento 9377 se promulgó, precisamente, bajo la premisa de que el propósito medular del proceso de imposición de multas del Departamento de Asuntos del Consumidor es disuadir a los comerciantes de bienes y servicios en Puerto Rico de incurrir en aquellas prácticas prohibidas por las leyes, reglamentos y órdenes que les sean de aplicación. Por tanto, las motivaciones que inspiran la promulgación de dicho Reglamento es una que reafirma que la misión del DACO no es una punitiva, sino restaurativa.

En fin, este proyecto se encuentra en consonancia con la política pública existente que promueve una estructura gubernamental que responda a las necesidades reales y contribuya a una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y, sobre todo, para nuestros comerciantes, sean estos grandes, pequeños o medianos. Igualmente, redundante en la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental; en la agilización de los procesos de prestación de servicios; y en una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o

una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 816 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 816, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

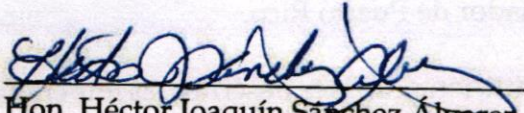
³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 816

16 de octubre de 2025

Presentado por el señor Toledo López

Referido a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" (DACO), a fin de establecer instituir los criterios bajo los cuales el DACO, fijará las cuantías de las multas que imponga por violaciones a las normas, leyes y reglamentos bajo su jurisdicción o a las órdenes que emita; establecer disposiciones relacionadas a los infractores reincidentes; un sistema de clasificación de infracciones leves, moderadas y graves; implantar un régimen de reincidencia; disponer las consecuencias jurídicas correspondientes a cada modalidad de infracción; proveer para que el Departamento enmiende el Reglamento Núm. 9377 de 3 de mayo de 2022, conocido como "Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas", con el propósito de atemperarlo a las disposiciones contenidas en esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, creó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger los derechos del consumidor en Puerto Rico y garantizar que las relaciones de consumo se lleven a cabo dentro de parámetros de transparencia, justicia y cumplimiento con la ley. Como parte de esa misión, el DACO tiene la autoridad para imponer multas administrativas a los negocios que violen las leyes, reglas u órdenes administradas por ese Departamento.

Pero la historia de estas últimas décadas nos muestra que no todas las infracciones

administrativas son iguales, ni todas afectan en la misma medida a los derechos del consumidor. En la mayoría de los casos, las violaciones encontradas son ~~violaciones~~ menores, errores de cumplimiento o errores operativos que no implican intención maliciosa y no causan daño directo al consumidor. La aplicación automática de sanciones pecuniarias en estos casos puede imponer cargas desproporcionadas, en particular a pequeños y medianos comerciantes, sin avanzar el propósito de la ley, que es fomentar un mercado justo y transparente.

Por lo cual, esta Asamblea Legislativa considera que se deben instituir criterios bajo los cuales el Departamento, fije las cuantías de las multas que imponga por violaciones a las normas, leyes y reglamentos bajo su jurisdicción o a las órdenes que emita. ~~debe codificar en la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor un sistema de clasificación de las infracciones administrativas en leves, moderadas o graves, según el perjuicio, la intención y el peligro al consumidor. Esta manera logra balancear~~ De esta manera, balanceamos el poder sancionador del DACO con los principios de proporcionalidad y razonabilidad administrativa.

for Cabe destacar que, el Reglamento Núm. 9377 de 3 de mayo de 2022, conocido como "Reglamento para la Imposición de Multas Administrativas", se promulgó bajo la premisa de que el propósito medular del proceso de imposición de multas del Departamento de Asuntos del Consumidor es disuadir a los comerciantes de bienes y servicios en Puerto Rico de incurrir en aquellas prácticas prohibidas por las leyes, reglamentos y órdenes que les sean de aplicación. Así las cosas, el Reglamento establece, específicamente, en la Regla 8 los criterios para fijar la cuantía de una multa. De igual modo, las Reglas 9 y 10 del Reglamento establecen las circunstancias agravantes y atenuantes al momento de imponer una multa.

Dicho lo anterior, esta Ley uniforma los procesos de imposición de multas administrativas contenidos en la Ley Orgánica del DACO y en la normativa promulgada para instrumentar dicha Ley, reafirmando que su misión no debe ser punitiva sino restaurativa.

La medida aquí propuesta establece, además, que en los casos de primera infracción calificada como leve o moderada, el DACO deberá informar la falta y otorgar al

~~comerciante un plazo prudencial para corregirla antes de aplicar una multa. Este mecanismo fomenta el cumplimiento voluntario y corrector, reforzando la relación cooperativa entre el regulador y el sector empresarial, sin perjuicio de la facultad del Estado de sancionar las infracciones graves o reiteradas que impliquen riesgo o perjuicio directo al consumidor.~~

~~Además, la reforma crea un régimen de reincidencia para violaciones repetidas de la misma disposición o de una conducta muy similar, con sanciones agravadas que pueden llegar a duplicar las multas e incluso revocar las licencias administrativas. Dicho esquema escalonado hace posible distinguir entre el infractor reiterado y el comerciante que comete errores aislados, estableciendo un justo equilibrio entre rigor y justicia administrativa.~~

En suma, esta política pública reafirma que la misión del DACO no debe ser punitiva sino restaurativa. El fin es promover esta Ley promueve un mercado leal y competitivo donde los consumidores estén protegidos y los negocios tengan reglas justas, proporcionadas y previsibles. Con ~~esta enmienda~~ las enmiendas aquí propuestas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico actualiza el marco jurídico de multas e infracciones del Departamento de Asuntos del Consumidor a los principios de buen gobierno regulatorio, transparencia administrativa y justicia económica que deben ~~gobernar~~ regir toda gestión pública. Asimismo, se fortalece el principio de libertad económica, al reducir cargas regulatorias innecesarias y fomentar la autorregulación responsable dentro del comercio puertorriqueño. De esta manera, se promueve un entorno de libre mercado dinámico, donde la competencia justa y el cumplimiento voluntario sirvan como los pilares del desarrollo económico de la Isla.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,
- 2 según enmendada, ~~conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del~~
- 3 ~~Consumidor"~~, para que lea como sigue:

1 "Artículo 18.-

2 (a) El Secretario tendrá facultad para imponer multas hasta un máximo de diez mil
3 (10,000) dólares.

4 (b) El Secretario podrá imponer multas por violación de las disposiciones de esta
5 Ley, las leyes que administra el Departamento o los reglamentos u órdenes emitidas por
6 el Departamento. Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada
7 como una violación separada.

8 (c) Los criterios para fijar la cuantía de la multa serán los siguientes:

9 (1) La multa se impondrá con el propósito de disuadir al comercio de incurrir en una
10 conducta en violación a las normas de leyes, reglamentos u órdenes, bajo la jurisdicción del
11 Departamento. Por ello, al determinar la cuantía se podrá tomar en consideración el objetivo de
12 tratar de evitar que el infractor incurra en la misma violación o violaciones similares.

13 (2) Toda multa que se imponga por una infracción que se considere "grave" podrá ascender
14 hasta el máximo permitido en este Artículo, pero nunca podrá ser menor a los cinco mil (\$5,000).

15 Se considerarán "graves", las siguientes infracciones:

16 (i) Violar órdenes de emergencia y/o disposiciones de leyes, reglamentos u órdenes
17 en periodos decretados como de emergencia;

18 (ii) Proveer información falsa e incorrecta al Secretario o a sus representantes
19 autorizados, o negar la producción de récords, informes o evidencia requerida como
20 parte de una investigación;

21 (iii) Incumplir con ordenes de cese y desista emitidas por cualquier funcionario del
22 Departamento con facultades delegadas.

1 (3) En aquellos casos en los que el Departamento hubiese emitido una Orden de Mostrar
2 Causa antes de notificar una multa, la cuantía a imponer como sanción nunca podrá ser menor a
3 cinco mil (\$5,000.00). Ello incluye todo tipo de infracción al amparo de las Leyes, Reglamentos y
4 Órdenes bajo la jurisdicción del DACO.

5 (4) Las multas relacionadas a cualquier Ley Especial se fijarán conforme a sus propias
6 disposiciones.

7 (5) Las multas que se emitan por violación a disposiciones independientes de las Leyes y
8 Reglamentos bajo la jurisdicción del Departamento, durante una visita rutinaria realizada por
9 Oficiales de Pesas y Medidas, Inspectores, Investigadores de querellas o cualquier otro empleado o
10 funcionario del Departamento al cual el Secretario le haya conferido tales facultades, podrán
11 ascender hasta mil dólares (\$1,000) si se trata de una primera infracción; dos mil (\$2,000) si es
12 una segunda infracción; y cuatro mil (\$4,000) para una tercera violación. El Departamento tendrá
13 discreción para aumentar dichas cifras hasta un máximo de un cincuenta por ciento (50%) en
14 aquellos casos en que hubiera accedido a transigir la multa, y el infractor incumpliera con los
15 términos acordados.

16 (6) En la fijación de la cuantía específica que aplique para cada caso relacionado al subinciso
17 (5) que antecede, el Departamento podrá considerar, entre otros, los siguientes criterios:

18 (i) La gravedad de la infracción, incluido el perjuicio que la misma pudo haber
19 causado a los consumidores.

20 (ii) El tiempo en que el infractor se ha mantenido en violación a la norma que dio
21 lugar a la multa.

22 (iii) Si el infractor es reincidente, según se establece más adelante.

1 (iv) El efecto disuasivo que se busca con la multa.

2 (7) Las multas que se emitan en respuesta a la violación al requisito de inscripción o
3 renovación de una licencia bajo la jurisdicción del Departamento, serán de \$5,000.00 para el
4 primer escenario (prestar servicios sin haberse registrado); y de \$1,000 por incumplir con el
5 requisito de renovación. Las multas impuestas al amparo de este inciso podrán ser condonadas si
6 el infractor:

7 (i) cumple con registrarse o renovar su licencia dentro de los treinta (30) días
8 siguientes a haberse remitido una Notificación de Multa;

9 (ii) no tiene órdenes del Departamento pendientes por cumplir;

10 (iii) no tiene querellas pendientes en el Departamento; y

11 (iv) no ha incumplido en dos (2) o más violaciones a su deber de inscripción o
12 renovación de licencia.

13 (8) No se condonarán las multas impuestas al amparo del subinciso (7) que antecede en
14 aquellos escenarios en los que la falta de inscripción o renovación oportuna de la licencia represente
15 un daño inminente para un consumidor en particular o para los consumidores en general.

16 (d) Circunstancias agravantes

17 De existir una circunstancia agravante, la cuantía a imponer por concepto de multa podrá
18 aumentarse en un veinticinco por ciento (25%), siempre que no exceda el máximo permitido en
19 este Artículo. Se considerarán como circunstancias agravantes, los siguientes hechos:

20 (1) Que la multa sea producto de una querella presentada en el Departamento por un
21 consumidor.

1 (2) Que la violación constituya una amenaza significativa a la salud, seguridad o al
2 ambiente.

3 (3) Que la naturaleza de la violación y/o la acción u omisión del infractor represente un
4 daño inminente para un consumidor en particular o para los consumidores en general.

5 (e) Circunstancias atenuantes

6 De existir una circunstancia atenuante, la cuantía a imponer por concepto de multa podrá
7 reducirse en un veinticinco por ciento (25%). Se considerarán como circunstancias atenuantes los
8 siguientes hechos:

9 (1) Que la violación se corrija en un periodo no mayor de quince (15) días, y;

10 (2) Que el infractor no sea reincidente en la violación que se le imputa.

11 (f) Criterios para transigir multas administrativas

12 (1) El Departamento tendrá discreción para transigir la cuantía de la multa en no más del
13 cincuenta por ciento (50%) de la cantidad originalmente impuesta, sujeto a que, como mínimo, el
14 infractor se comprometa a no incurrir en la misma violación o violaciones similares.

15 (2) Todo comercio al que le apliquen las disposiciones de la Ley 454-2000, según
16 enmendada, conocida como "Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño
17 Negocio", podrá levantar las protecciones de dicha ley y pedir que las mismas sean consideradas
18 para transigir la cuantía de la multa impuesta.

19 (3) En aquellas situaciones en las que, a manera excepcional, la causa que originó la multa
20 impuesta no pueda corregirse de manera inmediata, el Departamento tendrá discreción para
21 transigir la cuantía únicamente si se somete un plan de cumplimiento que permita, en un tiempo
22 cierto, corregir las circunstancias que provocaron la imposición de la multa.

1 (4) El término para el pago de una multa administrativa transigida no excederá de cuarenta
2 y cinco (45) días a partir de la firma del acuerdo de transacción salvo que, a manera de excepción,
3 el Secretario o el funcionario por el designado, entienda meritorio considerar un término de pago
4 distinto. Siempre que se haga uso de la discreción conferida mediante este subinciso, deberá quedar
5 constancia por escrito de la causa que dio lugar a dicha excepción.

6 (5) El incumplimiento con cualquiera de los términos de una transacción, será considerado
7 como una falta grave que dejará sin efecto el acuerdo y dará lugar a que se le requiera el pago total
8 de la multa originalmente impuesta, con un recargo de hasta un cincuenta por ciento (50%) de
9 dicho monto, al amparo de lo establecido en el inciso (c)(2) de este Artículo, además del pago de los
10 intereses legales acumulados que pudieran aplicar hasta el pago del total de la multa. En adición,
11 un incumplimiento de este tipo pudiera dar base a nuevas acciones en contra del infractor,
12 incluyendo, pero sin limitarse a, la revocación de permisos o licencias, el desarrollo de
13 investigaciones a su costo, la emisión de órdenes de mostrar causa o de cese y desista, entre otros.

14 (g) Reincidencia

15 Si el infractor es reincidente, la multa se aumentará en la mitad de la cuantía más alta que
16 hubiera sido previamente impuesta por la infracción cometida, hasta el máximo permitido por este
17 Artículo, o la Ley Especial que sea de aplicación.

18 Para efectos de esta Ley, es "reincidente" aquel comercio que, dentro de un término de cinco
19 (5) años, ha incurrido en dos (2) o más violaciones a una misma disposición de cualquier Ley,
20 Reglamento u Orden bajo la jurisdicción del Departamento. En el caso de comercios con más de
21 un local o establecimiento, la determinación de reincidencia estará basada en el local o
22 establecimiento.

1 ~~Al momento de imponer dichas multas, el Departamento deberá distinguir entre la~~
2 ~~naturaleza y gravedad de la infracción cometida, clasificándola como leve, moderada o grave,~~
3 ~~conforme a los criterios que se dispongan mediante reglamento.~~

4 ~~Las infracciones leves comprenderán aquellas de carácter formal o técnico que no~~
5 ~~representen riesgo o perjuicio moderado o grave para el consumidor. En los casos de primera~~
6 ~~infracción leve, el Secretario notificará al infractor la falta observada y concederá un término~~
7 ~~razonable, que no será menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días, para corregirla. De~~
8 ~~demostrarse la corrección dentro del término, no se impondrá multa. De no corregirse la~~
9 ~~deficiencia, el Secretario podrá imponer una multa equivalente hasta un veinte por ciento (20%)~~
10 ~~del máximo autorizado por este Artículo.~~

11 ~~Las infracciones moderadas comprenderán aquellas que, sin implicar daño directo o riesgo~~
12 ~~a la salud o seguridad pública, no contengan la magnitud de una infracción grave. En tales casos,~~
13 ~~el Secretario podrá imponer multa inmediata equivalente de un cincuenta por ciento (50%) del~~
14 ~~máximo autorizado por este Artículo.~~

15 ~~Las infracciones graves comprenderán aquellas que causen o puedan causar daño directo o~~
16 ~~riesgo a la salud, seguridad o patrimonio del consumidor, o que se cometan con dolo, fraude o~~
17 ~~reincidencia. En estos casos, el Secretario podrá imponer directamente la multa que corresponda~~
18 ~~hasta el máximo autorizado en este Artículo, sin necesidad de conceder término previo de~~
19 ~~corrección.~~

20 ~~Se considerará reincidente todo comercio, persona natural o jurídica que, dentro de un~~
21 ~~período de cinco (5) años, incurra en una o más violaciones de la misma disposición de ley,~~
22 ~~reglamento u orden administrativa, o de otra disposición que prohíba una conducta~~

~~sustancialmente similar, por la cual haya sido previamente multado mediante resolución final y firme del Departamento. Para fines de reincidencia, no será necesario que las violaciones sean continuas, bastando con que se cometan dentro del término antes señalado.~~

~~En caso de reincidencia, la multa podrá aumentarse hasta el doble de la cantidad originalmente impuesta, sin exceder los diez mil dólares (\$10,000). Si se incurre en una segunda reincidencia por la misma disposición o conducta sustancialmente similar dentro del mismo término, el Secretario podrá imponer la multa máxima dispuesta por ley y podrá, además, revocar permisos o licencias administrativas emitidas por el Departamento, conforme a reglamento.~~

~~Las multas finales impuestas solamente podrán ser disminuidas por el Secretario hasta un treinta y cinco por ciento (35%) del monto original[.], salvo que medie reincidencia conforme a lo dispuesto en este Artículo.~~

~~No obstante, en casos relacionados al requisito de inscripción y renovación de licencias, o en aquellos en que el infractor haya corregido la deficiencia señalada dentro del término concedido, la multa impuesta podrá ser condonada en su totalidad cuando la parte infractora cumpla con los requisitos de registro y no tenga órdenes del Departamento por cumplir.~~

~~El Departamento llevará creará, mantendrá y actualizará constantemente un "Registro de Infractores Reincidentes" y adoptará, mediante reglamento, los criterios específicos para su divulgación a la ciudadanía, la clasificación de infracciones, los efectos de cada modalidad y la determinación de reincidencia, asegurando la aplicación uniforme, proporcional y transparente de esta disposición."~~

Sección 2.- Se ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor a enmendar el

1 Reglamento Núm. 9377 de 3 de mayo de 2022, conocido como "Reglamento para la Imposición de
2 Multas Administrativas", con el propósito de atemperarlo a las disposiciones contenidas en esta
3 Ley, incluyendo aquellas relacionadas a la creación del denominado "Registro de Infractores
4 Reincidentes". Para ello, deberá cumplir con las disposiciones de la Ley 38-2017, según
5 enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
6 Puerto Rico", y con las de la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Flexibilidad
7 Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio".

8 Sección 2 3.- Separabilidad.

9 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta ley fuere
10 declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
11 no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta. El efecto de dicha sentencia quedará
12 limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta que así hubiere sido
13 declarada inconstitucional.

14 Sección 3 4.- Vigencia.

15 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No
16 obstante, el DACO contará con un término de ciento ochenta (180) días a partir de su
17 vigencia para adoptar el reglamento necesario para implantar las disposiciones de esta
18 Ley.